



PERSPECTIVAS

SUPLEMENTO DE ANÁLISIS
POLÍTICO, NO. 28

ENERO 2009

El gobierno Ortega en el 2009: a la mitad del río

El tercer año representa para casi todos los gobiernos un reto en cuanto a la sostenibilidad de sus propuestas y acciones. El gobierno del presidente Ortega no es la excepción, y el 2009 representa un año crucial para su gestión, pero sobre todo para su proyecto político. El escenario no es nada halagüeño, pues en el camino de los dos años prece-
dentes ha acumulado, una tras otra, señalamientos y críticas, una tenaz oposición interna y más recientemente, el aislamiento internacional. A esto se agrega el desfavorable escenario de la crisis económica internacional que ya está haciendo impacto en el país. De ahí que una gran pregunta a dilucidar en el 2009 es, si el gobierno tendrá la capacidad de mantener la tendencia autoritaria que ha mostrado hasta ahora o, por el contrario, moderará sus pretensiones para poder lidiar con la crisis.

2008: un balance indispensable

Los últimos meses del año 2008 el país sufrió en toda su crudeza, la naturaleza del gobierno frentista. Empeñado en contener cualquier expresión de oposición y en asegurar el control político por todos los medios posibles, el gobierno desató una escalada de violencia sin precedentes que incluyó ataques de sus partidarios contra todas las manifestaciones de la oposición política, la sociedad civil y los medios de comunicación.

En noviembre de ese año, llevó a cabo un evidente y vergonzoso frau-

de durante el proceso de elección de las autoridades municipales en todo el país, poniendo en crisis a todos los poderes del Estado, particularmente a la Asamblea Nacional y el Consejo Supremo Electoral. El resultado fue: un parlamento paralizado, leyes de primera importancia sin aprobación y el presidente legislando por decreto en abierta violación a la Constitución Política. Otra consecuencia de la crisis institucional es la falta de legitimidad y credibilidad del órgano electoral, y la desconfianza ciudadana en el ejercicio del voto como mecanismo democrático de elección de autoridades. Hasta la fecha, el CSE no ha publicado los datos totales de

los resultados electorales y se ha negado a reconocer las denuncias de fraude que se han hecho en todo el país. Antes bien, se aprestó a legitimar un decreto presidencial confirmando los resultados electorales.

La persecución a medios de comunicación y ONGs, así como las evidencias del fraude electoral dieron lugar al rechazo de la comunidad internacional, particularmente de las agencias de cooperación presentes en el país. El gobierno se negó a escuchar las críticas y respondió menospreciándolas y desatando una campaña de ofensas que agudizó la situación. De ahí que donantes importantes como la Cuenta Reto del Milenio, apoyada por Estados Unidos, y la Unión Europea, así como otros países europeos que cooperan bilateralmente con el país, decidieron suspender los desembolsos pendientes para el 2008 y el apoyo al presupuesto de la República para el 2009, hasta que el gobierno no transparente el cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de democracia y gobernabilidad. En el caso de la Unión Europea, que manifestó claramente su preocupación por el estado de la institucionalidad democrática, el sistema judicial y la transparencia, la cifra congelada consiste en 120 millones de euros destinados al apoyo presupuestario. A esto se agrega el recorte de fondos provenientes de la cooperación venezolana a causa de la baja en el precio del petróleo. En el balance se suman entonces, la crisis política



y la económica. Dos escenarios difíciles.

Una economía que no mira hacia los pobres

Mientras decaen los flujos de cooperación, el desempeño del país en términos económicos y sociales tampoco fue satisfactorio durante el pasado año. La ejecución presupuestaria se retrasó notablemente, aún en los ministerios más importantes tales como educación, salud, transporte y producción, revelando un pobre desempeño de las instituciones gubernamentales en el cumplimiento de sus funciones.

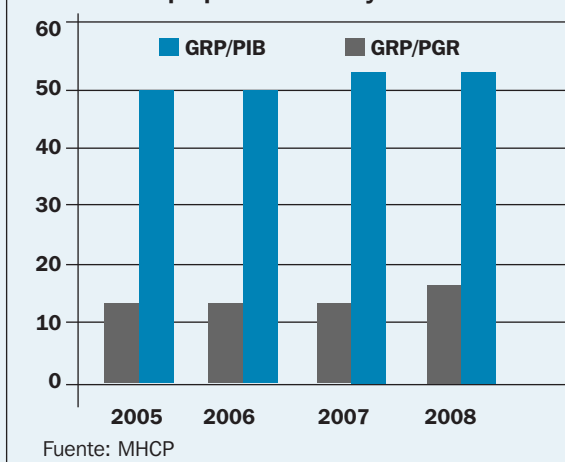
Cuadro 1: Ejecución presupuestaria Enero-Septiembre, 2008

Ministerio	%
MAGFOR	59
MEDE	64.4
MINSA	68.2
MTI	56
Fuente: MHCP.	

Desde el punto de vista estructural, la tendencia del modelo económico fue de continuidad, con cierto activismo en algunos sectores. Sin embargo, tres aspectos deben destacarse: la inversión social descansó en un esquema de financiamiento externo, el gasto en pobreza se mantuvo como parte del gasto social genérico y las metas de reducción de la pobreza se basaron exclusivamente en la inversión social teniendo como referencia a los Objetivos del Milenio. (ver cuadro 2)

El hecho de que la reducción de la pobreza se vincule sólo a la inversión social es preocupante, si no se aborda seriamente el tema de cómo se produce y distribuye la riqueza. La vieja idea de “habilitar a los pobres”, muy difundida en los años de ajuste y compensación social, es un flotador muy débil para situaciones de pobreza masiva y estructural como las de Nicaragua. De ahí que en esta conti-

Cuadro 2: Gasto en pobreza, en proporción al PIB y al PGR



nuidad no se vio un marco económico claro que le diera sostenibilidad a la lucha contra la pobreza y más bien la ecuación se construyó a partir de proyectos con beneficios que duraban lo que duraban los fondos.

Pero además, tampoco en el 2008 el gobierno del presidente Ortega se diferenció de sus predecesores. Muy por el contrario, las denuncias de corrupción, falta de transparencia, derroche y uso discrecional de los recursos, se multiplicaron por todos los medios de comunicación, particularmente en lo que se refiere al uso de los fondos provenientes de la cooperación venezolana y el clientelismo promovido durante la campaña electoral de finales del 2008.

Así, el panorama económico para el año 2009 tampoco augura bienestar para el país, pues a los elementos señalados con anterioridad, se agregan los efectos de la crisis internacional y la tardía respuesta del gobierno para enfrentar esta situación.

La reafirmación del Pacto

Con ese cierre de año, durante el mes de enero de 2009, la crisis en la Asamblea Nacional continuó con la imposibilidad de elegir una nueva junta directiva, pues tanto la oposi-

ción como el partido de gobierno no contaban con los votos suficientes para establecer una correlación de fuerzas favorable. Por otra parte, el gobierno comenzó a sentir la presión del retiro de los fondos de cooperación al apoyo presupuestario y debía tomar medidas urgentes para enfrentar el impacto de la crisis económica

internacional en el país. La reactivación de la Asamblea Nacional era una necesidad urgente.

Esa coyuntura se convirtió en la condición ideal para refundar el pacto político entre Arnoldo Alemán, por el PLC, y Daniel Ortega, por el FSLN. Aunque los liberales arnoldistas negaron una y otra vez las negociaciones, éstas dieron como resultado que la Corte Suprema de Justicia emitiera una resolución sobreseyendo definitivamente a Alemán de los delitos por los cuales estaba condenado a prisión, la casi automática reelección de la junta directiva del parlamento, la aprobación inmediata de varias leyes que hacían parte de la condicionalidad de los organismos multilaterales para facilitar fondos al país y las necesarias reformas al presupuesto de la República para el año 2009. Al final, el FSLN retomó el control de la Asamblea Nacional al reelegir a la junta directiva, pero además, ocupando la presidencia de 10 de las 15 comisiones de trabajo del órgano legislativo. Tanto la llamada Bancada Democrática Nicaragüense como los diputados de la Alianza Movimiento de Renovación Sandinista, fueron desplazados y marginados.

Aunque no se conoce la letra menuda del nuevo acuerdo, es evi-

dente que el tema de las denuncias e impugnaciones de fraude en las elecciones municipales del 2008, que el PLC había declarado no ceder por nada, al final quedó relegado y los alcaldes “elegidos” fueron juramentados por el CSE en un acto público presidido por el presidente Ortega, y tomaron posesión de sus cargos en medio de conflictos, enfrentamientos y una gran falta de legitimidad.

Con eso, ambos partidos han decidido cerrar sus oídos a esta situación y caminar sobre hechos consumados a cualquier costo, incluidos los resultados electorales obtenidos tardíamente en 7 municipios de la Región Autónoma del Atlántico Norte a mediados de este mes. La ilegitimidad que se cierne sobre las principales instituciones del Estado y las autoridades municipales constituye el borde de una espada afilada sobre la cual, el país ha comenzado a hacer equilibrio.

Pero ese es el mal menor. De acuerdo a las declaraciones del mismo Arnoldo Alemán y otros dirigentes del PLC, la esencia del nuevo pacto es el control y alternancia del poder entre los dos caudillos. Para ello, se presume que llevarán a cabo las reformas constitucionales que han ansiado por tanto tiempo y van a cerrar aún más el espacio del sistema político, negándole la entrada a cualquier otra fuerza política que no se pliegue a sus planes.

Obligados a rectificar

Aunque el gobierno ha logrado inclinar la balanza del control político a su favor, no las tiene todas consigo, y la piedra que aprieta el zapato en este momento, es la economía. Una vez que el gobierno logró controlar la situación en la Asamblea Nacional, el presidente compareció en un tono muy conciliador para pre-

sentar el plan de emergencia frente a la crisis económica internacional. Más allá de los discursos sobre la ruptura con el neoliberalismo, el gobierno se centró en las amenazas de la crisis financiera internacional y la



El plan económico ha sido calificado por algunos especialistas, como tardío, pues las medidas debieron tomarse desde finales del año pasado. Los economistas señalan que tales medidas en realidad son cosméticas y no podrán enfrentar verdaderamente los efectos de la crisis sobre los sectores más empobrecidos del país.

presión sobre determinados rubros, el acceso al crédito y la evolución de las remesas.

Su planteamiento es seguir fomentando la creación de infraestructura, facilidades para la inversión, protegerse en mercados regionales y continuar la inversión social. Para ello, dispuso cuatro grandes acciones: reducir el presupuesto general de la República en mil 312 millones de córdobas, solicitar el apoyo de la cooperación europea, realizar préstamos a diversos organismos multilaterales y disminuir el gasto corriente en un 20 %. Pidió además, responsabilidad patriótica, tolerancia y el cese de la violencia política para poder responder a la crisis.

El plan económico ha sido calificado por algunos especialistas, como tardío, pues las medidas debieron tomarse desde finales del año pasado. Además, los economistas señalan que tales medidas en realidad son cosméticas y no podrán enfrentar verdaderamente los efectos de la crisis sobre los sectores más empobrecidos del país.

Evidentemente, el nuevo tono del discurso presidencial y la búsqueda de la cooperación europea es una muestra de la necesidad que el gobierno tiene de contar con esos fondos para poder sostener su plan económico. Algunas señales han intentado enviar a la cooperación buscando como abrir el diálogo; sin embargo, no están dispuestos a ceder en temas que los donantes consideran sensibles: las condiciones de la democracia, el respeto de las libertades y derechos ciudadanos, y particularmente, la transparencia de los resultados electorales del 2008.

Entre la tentación y la necesidad

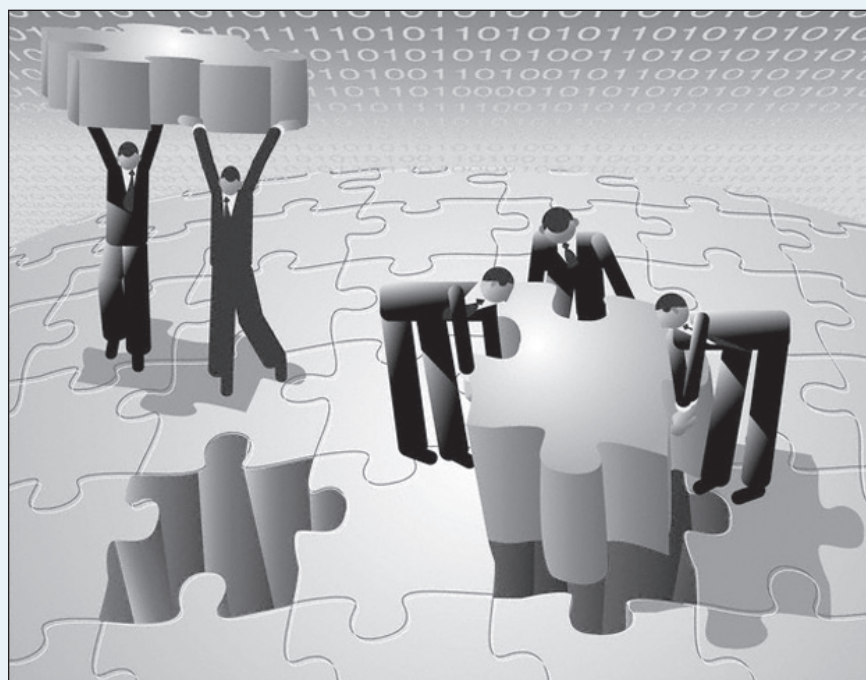
Los escenarios que se han venido dibujando durante los últimos meses, no son los mejores para el gobierno y la sociedad nicaragüense.

El presidente no ha renunciado a su ambición de construir y fortalecer una estructura de poder que le asegure la permanencia y el control institucional del Estado. Sin embargo, está acicateado por la crisis económica, la presión interna, tanto política como social, y la presión internacional.

Aparentemente, la línea de acción que pretende seguir el gobierno es tratar de obtener los fondos de cooperación necesarios para sostener su plan económico, pero sin retroceder en lo esencial. Es decir, sin revisar los resultados electorales, sin abandonar el esquema de transacciones con el PLC a fin de realizar las reformas constitucionales que le den cobertura legal a la concentración de poder que han venido operando, sin ceder el control de las instituciones estatales, y sin renunciar a su estrategia de contención y control sobre cualquier expresión de disidencia. La ecuación para la segunda mitad del período presidencial es, entonces: hechos consumados, poder duro y clientelismo.

Sin embargo, el éxito de esta estrategia no depende solamente de la voluntad del gobierno. Depende también de la disposición de la cooperación y la voluntad de los diferentes actores de la sociedad nicaragüense, especialmente la sociedad civil. Del lado de la cooperación, se espera que mantengan su posición de respaldo a los principios democráticos como condición para el desembolso de fondos, especialmente aquellos que apoyan a los actores de sociedad civil en la defensa de los derechos humanos.

La sociedad civil y los medios de comunicación pueden jugar un importante papel de fiscalización y denuncia, tal como lo han hecho hasta ahora. Entre las organizaciones de la sociedad civil es crucial mantener los niveles de autonomía que se han



La sociedad civil y los medios de comunicación pueden jugar un importante papel de fiscalización y denuncia, tal como lo han hecho hasta ahora. Entre las organizaciones de la sociedad civil es crucial mantener los niveles de autonomía que se han logrado hasta ahora y promover la construcción de alianzas a fin de conformar un frente amplio ciudadano que se movilice en defensa de la democracia.

logrado hasta ahora y promover la construcción de alianzas a fin de conformar un frente amplio ciudadano que se movilice en defensa de la democracia.

Los empresarios privados y gremios productivos también tienen un rol que jugar, no solamente porque ellos se verán afectados por las consecuencias de la crisis que vive el país, si no también porque hacen parte de la sociedad nicaragüense y lo que está en juego son los derechos fundamentales y el rumbo del país para los próximos años.

Mientras tanto, los partidos opositores que han quedado en minoría dentro de la Asamblea Nacional y casi en la ilegalidad jurídica, tienen la responsabilidad histórica de defender los principios democráticos y los intereses de la ciudadanía, pero además, tienen la responsabilidad de demostrarle a la sociedad nicaragüense que es posible poner en práctica una nueva forma de hacer política, otras formas de liderazgo y que son capaces de hacer el cambio hacia una nueva cultura política basada en los valores democráticos.